

YIHADISMO EN EL SAHEL OCCIDENTAL: UNA AMENAZA CRECIENTE Y COMPARTIDA

TEXTO: **JESÚS DÍEZ ALCALDE**
CORONEL ANALISTA

EL YIHADISMO VIOLENTO SE EXPANDE SIN CONTROL POR EL SAHEL OCCIDENTAL, EMPIEZA A ATENTAR EN LOS PAÍSES LÍMITROFES DEL GOLFO DE GUINEA Y AMENAZA CON UNIRSE A LA SINRAZÓN TERRORISTA QUE TIRANIZA EL NORESTE DE NIGERIA DESDE HACE UNA DÉCADA; Y TODO ELLO PESE AL ENORME ESFUERZO NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL REALIZADO.



Hoy, en el inmediato sur de Europa, esta región africana se ha convertido en el epicentro y foco más preocupante del extremismo islamista mundial que, lejos de aminorar su tiranía sobre la población y su creciente dominio territorial, está dinamitando la paz, la gobernanza y el progreso de millones de africanos.

En 2012, la revuelta tuareg en el norte de Mali —alentada y fortalecida por el regreso de militares tuaregs cargados de armamento desde el derrocado régimen libio— destapó una constatada realidad en la región. Durante décadas, y tras ser expulsados de Argelia, los yihadistas de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) habían instaurado

un santuario en el desierto saheliano. Allí, dominaban, captaban y radicalizaban a una población hastiada y olvidada, que recibía de los fundamentalistas la protección y el sustento económico —una suerte de acción social con dinero confiscado a las redes criminales— que el propio Estado les negaba. Someterse al cruel imperio del rigorismo islamista y a la más estricta *sharia* —la ley islámica, bandera del extremismo salafista— era el peaje a pagar; y enfrentarse a ellos conducía, con toda seguridad, a una ejecución sumaria.

En este contexto de dominio social, los dirigentes de AQMI no iban a permitir que los insurgentes tuaregs frenasen su pro-

yecto de instaurar un califato islamista en toda la región. Para evitarlo, salieron de sus madrigueras e hicieron visibles sus ansias de poder, secuestraron la revuelta tuareg y tomaron el poder en toda la región de Azawad. Desde allí, intentaron conquistar todo el país, hasta que una contundente reacción militar francesa —la operación Serval— les detuvo en su embestida violenta hacia Bamako.

LA EXPANSIÓN Y AUGE DEL YIHADISMO EN EL SAHEL

Han pasado más de ocho años, y la situación es hoy mucho más grave que en aquel 2012: no se ha conseguido erradicar la

amenaza yihadista, se han multiplicado los grupos y las alianzas terroristas, y sus campañas de terror se extienden hoy por toda la región saheliana y más allá, con la pretensión de ejercer un poder despótico y violento sobre la población. Como consecuencia, los yihadistas están lastrando el futuro de millones de africanos que —ante la ineficiencia o inanidad de sus gobiernos— se ven obligados a abandonar sus hogares; a someterse al imperio del rigorismo salafista —en una región donde el Islam nunca fue motivo de disputa o enfrentamiento social—; o a unirse al yihadismo violento por motivos que, en muchos casos, poco tienen que ver con la creencia religiosa, y mucho con la pretensión de buscar sentido a sus vidas y salir de la frustración que provocan el desarraigo, la falta de expectativas y el abandono del poder estatal.

En cuanto a la dimensión de la amenaza que enfrentamos, los yihadistas son ahora más fuertes y están mejor organizados, y también han acrecentado su control territorial para extenderse, desde su epicentro en Mali, a la región de Liptako-Gourma, que comparten Mali, Burkina Faso y Níger. Además, comienzan a atentar en los países del Golfo de Guinea (Costa de Marfil o Benín), y amenazan unir sus fuerzas con los yihadistas de Boko Haram y del autodenominado Estado Islámico del África del Oeste (ISWAP, por sus siglas en inglés), que mantienen su campaña de terror en la región del Lago Chad.

En 2017, la alianza de las milicias leales a Al Qaeda en el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe) marcó un punto de inflexión para el entramado terrorista en el Sahel. Bajo esta franquicia del terror se unieron las milicias salafistas Ansar Dine —su fundador, Iyag Ag Ghaly, ejerce el liderazgo del JNIM—, el Frente de Liberación de Macina y Al Murabitun para emprender una lucha conjunta contra las fuerzas de seguridad locales e internacionales, contra cualquier atisbo de poder estatal y contra las poblaciones que reniegan someterse a sus propósitos extremistas. En febrero de 2020, el presidente maliense Keita anunció su intención de negociar con JNIM un acuerdo de paz, a lo que Iyad Ag Ghaly no se mostró reacio siempre que las tropas extranjeras se retirasen previamente



del país. Por el momento, no ha habido ningún avance en este ámbito, y aunque unas hipotéticas conversaciones de paz cambiarían de forma drástica el escenario yihadista en la región, nunca significarían, a medio plazo, la erradicación de una amenaza tan difusa como escurridiza.

Tan solo dos años antes de la fundación de JNIM, había irrumpido en el Sahel la primera franquicia oficial de Daesh —el autoproclamado Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS)—, que amenazaba con usurpar el poder a los esbirros de Al Qaeda. Sin embargo, y frente a cualquier pronóstico, los dos grupos yihadistas acordaron un pacto de no agresión (2017 y 2018) e incluso llegaron a colaborar en 2019, sin que ninguna de las facciones renunciase a ejercer la hegemonía local. Pero todo cambió a principios de 2020, cuando las filiales de Al Qaeda y Daesh emprendieron una guerra “fratricida” que ha provocado numerosas bajas en sus filas. Un enfrentamiento motivado, principalmente, por el posible acercamiento del JNIM al gobierno “apóstata” de Mali, que el EIGS argumenta para alentar deserciones y robar adeptos para su causa, así como por su ansia desmedida de controlar las redes criminales en la región: el oxígeno financiero que, junto con los saqueos en las poblaciones atacadas, les permite incrementar la captación de adeptos y contar —mediante donativos y ayudas a una población exasperada— con un mayor reconocimiento social.

Por otro lado, tanto el JNIM como el EIGS están agravando la lucha entre co-

munidades ganaderas y agrícolas —nunca tan convulsa como en la actualidad—, que ya se ha cobrado cientos de víctimas; intentan sacar rédito de la actual pandemia provocada por el coronavirus, argumentando que la COVID 19 es un castigo divino dirigido a los “apóstatas occidentales”; y —como señaló en julio el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres— buscan “explotar las divisiones, los conflictos locales y los fallos de los gobiernos causados por la pandemia” para intensificar sus ataques y desafiar a la autoridad estatal en el Sahel. Así, los yihadistas, erigidos como los únicos protectores sanitarios de la población allá donde el Estado no está presente, intentan reclutar y adoctrinar a nuevos fanáticos para su causa extremista.

Asimismo, más de 4.000 personas fueron asesinadas en 2019 en esta región saheliana; y —según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo— la situación se ha degradado aún más en los países del Sahel Central —Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Camerún—, cuya población ha sufrido un 36,7% del total de atentados registrados a nivel global durante este primer semestre de 2020. Además, el terror yihadista ha provocado más de un millón de desplazados dentro del país o refugiados fuera de las fronteras nacionales, mientras que muchos miles han decidido migrar hacia Europa. A todo esto se une la degradación social que provoca el fanatismo violento entre las poblaciones bajo su



Gráfico: Departamento de Seguridad Nacional

dominio, que incluye el reclutamiento de niños para perpetrar sus atrocidades.

LA RESPUESTA FRENTE AL YIHADISMO

Desde 2013, con la eclosión del yihadismo en la región, la colaboración internacional con los distintos gobiernos nacionales y las organizaciones regionales ha sido constante, y cada vez más contundente. En la actualidad, la Misión de Naciones Unidas para Mali (MINUSMA) despliega 15.200 cascos azules para dar protección a la población maliense; mientras, la operación francesa Barkhane —con más de 5.000 efectivos— lidera la lucha contra los grupos terroristas en la región.

Por su parte, el compromiso de la Unión Europea se materializa en la Misión de Adiestramiento (EUTM) de las fuerzas armadas de Mali —en la que España es el mayor contribuyente—, así como en las Misiones de Capacitación (EUCAP) en Mali y Níger, cuyo objetivo es formar

a las fuerzas de seguridad y fortalecer el sistema judicial de ambos países.

En clave regional, la Fuerza G5 Sahel —que aúna los esfuerzos militares de Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad— vigila las fronteras para evitar el tránsito de los terroristas.

A este esfuerzo global en el ámbito de la seguridad se unen otras iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la coordinación de la cooperación exterior, como la Coalición Internacional por el Sahel, con un marcado liderazgo de la Unión Europea y de la que España forma parte; así como la Alianza por el Sahel, focalizada en el desarrollo de los países sahelianos y cuya Asamblea está presidida, desde el mes de junio, por España.

Con todo, el objetivo es consolidar un enfoque integral en la lucha contra el extremismo violento, desde el convencimiento de que la solución militar —aun siendo imprescindible para proteger a la pobla-

ción— nunca será suficiente mientras que no se aborden la mala gobernanza, el subdesarrollo y la frustración social, que alienan y sustentan el reclutamiento y la capacitación de nuevos adeptos a la sinrazón yihadista: una amenaza que compartimos dentro y fuera del continente africano. ■



NOTA DEL AUTOR

El 18 de agosto, Mali fue víctima de un golpe de Estado incruento. En la actualidad, una junta militar preside el país, que se ha comprometido a consensuar una hoja de ruta para la transición nacional. La comunidad internacional ha condenado la ruptura abrupta del orden constitucional, y exige la restauración de un gobierno civil lo antes posible. Sin duda, los grupos terroristas intentarán sacar beneficio de la inestabilidad imperante en el país: el escenario más propicio para la expansión del yihadismo.